



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



MEMORIA

LEIDA POR EL

PRESIDENTE DE LA ILUSTRISIMA CORTE SUPERIOR

DE LA LIBERTAD Y LAMBAYEQUE,

Dr. D. Pedro Martinez de Pinillos,

EN LA APERTURA DEL TRIBUNAL EL 18 DE MARZO DE 1904



TRUJILLO

Imprenta de «El Obrero del Norte»—Independencia, N.º 95

1904

Dr. Dr. Com José Viterbo escrib,

Lima

MEMORIA

LEIDA POR EL

PRESIDENTE DE LA ILUSTRISIMA CORTE SUPERIOR

DE LA LIBERTAD Y LAMBAYEQUE,

Dr. D. Pedro Martinez de Pinillos,

EN LA APERTURA DEL TRIBUNAL EL 18 DE MARZO DE 1904



TRUJILLO

Imprenta de «El Obrero del Norte»—Independencia, N.º 95

1904

3
PE
1904

For Leg
PERU
CTS Lib.

4/11/38



SEÑORES:



SPECIALES y muy conocidas circunstancias dieron motivo á que se me designara para presidir, en el año judicial que termina, las labores de esta ltma. Corte, posponiendo á la antigüedad, la inteligencia, claro é ilustrado criterio, y bien probada justificación de cada uno de los demás miembros que la forman.

He hecho lo posible por corresponder á la confianza con que inmerecidamente se me honrara; y para, á ejemplo de mis colegas, cumplir, en todo sentido, las obligaciones que las leyes imponen á la Magistratura, soportando con ellos las contrariedades de todo género que ocasionan la arrogancia de unos, las exageradas pretensiones de otros, las inconcebibles libertades de los más, y la desobediencia por sistema; por que á todo trance se ha de hacer lo que la ley no prohíbe, sin fijar la atención en que este principio, aún cuando fuera, que no lo es, aplicable al modo de proceder, no está en pugna con la disciplina que, en los centros judiciales debe observarse, y hay necesidad de exigir, para sostener la respetabilidad gradual, y corregir á tiempo y con éxito los vicios que se introducen en la práctica por negligencia, descuido, indebidas complacencias ó mala aplicación de la ley.

Nada ha impedido que el Tribunal fiel á sus propósitos, haya puesto en ejecución los medios conducentes á la pronta y exacta administración de justicia, ya removiendo los obstáculos que comunmente á ello se oponen, ya entregándose con decidido empeño al estudio de las cuestiones que han venido á su conocimiento, para que sus fallos, llevando el sello de la imparcialidad, sean la fiel expresión de la ley. Y aunque se ha perdido mucho tiempo en calurosas y prolongadas discusiones, buscando el acierto, ha despachado mayor número de causas que en todos los años anteriores.

Los cuadros estadísticos que van anexos bajo los números 1 y 2, dan idea exacta del movimiento judicial que, en pocas líneas, es el siguiente:

Al abrirse el despacho el 18 de Marzo de 1903, existían pendientes en Secretaría 206 causas civiles y 40 criminales; y habiendo ingresado desde esa fecha hasta el día 520 de las primeras y 325 de las segundas, resulta un total de 1091 causas, de las que se han resuelto 892, quedando pendientes para 1904 solo 156 civiles y 43 criminales: estas últimas no se han resuelto, como era de esperar, durante las vacaciones, por no haber sido posible reunir la Sala con regularidad.

No obstante el resultado es satisfactorio y corrobora el informe emitido en minoría por mí y el Sr. Vocal Dr. D. Carlos A. Washbun, que mereció el apoyo de la Excma. Corte Suprema, combatiendo el proyecto de creación de una Segunda Sala en este Tribunal.

Insignificante, en verdad, es el número de 199 causas para la labor de una segunda Sala en los diez meses de un año judicial, debiendo advertir que de ese número unas están aún en sustanciación por haber ingresado poco antes del 14 de Enero último, otras retenidas por algunos abogados, mas tiempo del preceptuado por la ley, con el pretexto de preparar la defensa; y algunas estudiadas para discutir y resolver.

Los Conjuces de segunda instancia han contribuido con sus luces á la solución de cuestiones difíciles; y aún en las vacaciones han prestado sus servicios.

Se han expedido 3459 decretos— por sala 1936 en cau-

sas civiles y 742 en las criminales y por la presidencia 781.

En 63 acuerdos, se ha tratado de 360 asuntos administrativos; se han recibido 15 juramentos á diversos funcionarios, entre los que se cuentan dos señores Prefectos, dos Sub-prefectos cuatro Jueces de 1.^a Instancia, y un Abogado.

Los cuadros números 3 y 4 acusan la naturaleza de las causas civiles, y los delitos de que han sido materia las criminales.

De las causas elevadas á la Excma. Corte Suprema han sido devueltas 65, declarando la nulidad ó insubsistencia en 18, no haberla en 32, por improcedencia 2, por desistimiento 11 y por deserción 2.

Se han emitido trece informes pedidos unos por el Supremo Gobierno y otros por la Excma. Corte Suprema; y dirijídose 1730 oficios á diversas autoridades.

Promovidos el Relator de esta Corte Dr. D. Santiago M. Vásquez á la Judicatura de la Provincia de Pacasmayo, y el Secretario de Cámara Dr. D. Luis González á la de Tumbes, hay la seguridad de que administrarán recta é imparcial justicia atendidos sus conocimientos profesionales, su reconocida honorabilidad y los buenos servicios que han prestado en esta Corte, en cuya escuela se han ejercitado algunos años.

Esos funcionarios están reemplazados respectivamente con los doctores, Wenceslao Pinillos Rosell y José P. Ottonne, jóvenes inteligentes, ilustrados y estudiosos que indudablemente desempeñarán con provecho los cargos con que han sido favorecidos.

El nuevo Secretario recibirá perfectamente arreglado, con el respectivo inventario, el archivo de la oficina, que, aunque de pronto está colocado en estrecha habitación, por encontrarse las cuatro adyacentes en deplorable estado, reclamando costosas reparaciones, podrá suministrar en pocos momentos los datos que se le exijan.

Por tercera vez á partir de 1875 he logrado que se reconstituya el desordenado archivo, aumentando el número de anaqueles, y aprovechando de la buena voluntad del ofi-

cial primero de la Secretaría don Manuel E. Leguía, infatigable en el trabajo aún en los días señalados para el descanso. Este empleado sobre quien viene pesando hacen veinte años toda la labor de la oficina, por ser el único auxiliar del Secretario, está tan mal remunerado que se hace preciso procurar que el próximo Congreso Ordinario eleve su renta de £. 4 á £. 8, y que á la vez se cree un amanuense con un sueldo no menor de £. 4, por que así lo exige el movimiento de dicha oficina.

Queda así mismo arreglado, desde el segundo semestre de 1896 hasta Diciembre último, "El Peruano" periódico oficial, de cuya colección se había prescindido; y he dispuesto que se encuaderne.

Las Judicaturas de Primera Instancia del fuero ordinario, la privativa de aguas de esta provincia y las Agencias Fiscales del Distrito Judicial están servidas por un personal de reconocida competencia y honorabilidad; mas se ha hecho notable la demora indefinida que sufren los exhortos dirigidos á esta capital de las diversas provincias de la República; y las causas que vienen en asesoría por alguno de los motivos establecidos por la ley. Respecto de los primeros conviene prevenir por medio de una circular, que los indicados exhortos, tratándose de asuntos civiles, se remitan, acompañando en sellos de correo el importe de las actuaciones y demás gastos indispensables; y en cuanto á las causas en asesoría, debe solicitarse por el conducto regular y en la forma que corresponde, que se autorize á los Jueces para que procedan análogamente á lo que dispone la ley de 4 de Noviembre de 1886 en su artículo 5.º

Esas causas duermen en los archivos de los Escribanos tres y cuatro años, por que no se presenta persona á quien hacer saber el decreto de prevención; más como éste no tiene otro objeto que el de recusar ó no al Juez, y es muy remoto que se presente el caso de usar de tal derecho, parece bastante la notificación que se hace del decreto de remisión de la causa en asesoría.

El Tribunal ha podido informarse de la demora de esas causas, por quejas venidas de las provincias del interior; y

si bien en estas son de pequeña importancia las cuestiones que se ventilan, deben evitarse los notables perjuicios que sufren los litigantes, si no se resuelven inmediatamente.

Creo tambien necesario que se prevenga á los Jueces:

Que eviten decretos inútiles que tienden á demorar la sustanciación de los juicios, como los que expiden en algunos recursos—"venga con sus antecedentes"—ú otros semejantes que dan tiempo al tiempo: los Escribanos no deben dar cuenta de las solicitudes que reciban de los litigantes, sin presentar el expediente á que aludan:

Que no deben pedir al Tribunal las causas que penden en apelación, con el objeto de fallar las que jiran en sus Juzgados: los litigantes por economía, ó con el propósito de impedir que en segunda instancia se resuelva un juicio, ántes que otro en primera, que de alguna manera se relacionen, procuran la petición de los expedientes ya aludidos; y si á ello se accede, lo que no es correcto, en mi concepto, aun que sea por limitado tiempo, que se prolonga indefinidamente, resulta que la jurisdicción del superior la ha suspendido el inferior. Si los Jueces ó las partes necesitan documentos ó piezas de autos que penden en el Tribunal, deben ordenar que se soliciten las copias que convengan. Otro tanto deben verificar cuando se trate de expedientes archivados en los oficios públicos ó de protocolos, á fin de que no sufran perjuicio las rentas públicas ni los Escribanos, y de evitar el posible extravío de documentos importantes:

Que en la foliatura de los expedientes se proceda de la misma manera que en los registros de los Escribanos Públicos, con letra clara, sin que por ningún motivo se enmiende, borre ó altere, salvandose los equívocos al márgen de la misma foja, con conocimiento del Juez:

Que cuando se desglosen piezas de los expedientes, para seguir por cuerda separada algún incidente, ó para que se practiquen diligencias fuera del lugar del juicio, ó en cualquier otro caso, no se altere la foliatura, ni en el proceso ni en las piezas ó fojas que se desglosen; debiendo anotarse al márgen de la foja anterior á las que se separen, cual es la numeración de éstas, y cual el sentido de los recursos, autos, decretos, & que cada uno contiene; y que si lo desglosado

vuelve á unirse á lo principal, continúe con su propia numeración, anotandose al márgen del lugar de donde se hizo la separación, la última foja á que se le haya agregado. Esto es tanto más necesario, cuanto que con frecuencia se hace difícil conocer las citas que hacen los Jueces en sus autos ó sentencias:

Que en los juicios ordinarios se cumpla estrictamente la ley, actuando por separado las pruebas de cada litigante, para facilitar su estudio, y para que sea una realidad, y no una ficción, el decreto mandando unir dichas pruebas; y que en este caso no deben correr adheridos al expediente, sino á él acumulados, los cuadernos con el respectivo número correlativo ó letra, y con anotación en el principal del número de fojas de cada uno, como lo he propuesto en otra ocasión:

Que cuando se expidan copias para ocurrir por queja ó por apelación en un efecto, se indique en el exordio la naturaleza de la causa: que las copias se expidan por órden cronológico, anotando al márgen la foja del expediente en que se encuentra cada uno de los recursos, decretos, providencias y autos; cual es el apelado y cual el denegatorio; y que resueltas y devueltas las quejas para que corran con su principal, no se adyera á este materialmente, bastando para distinguir lo actuado señalarlo con el número correlativo.

La judicatura de esta Provincia que quedó vacante por fallecimiento del Dr. D. Manuel Bráñez, está hoy servida por el Dr. D. Neptalí Chávarry persona tan circunspecta, ilustrada y honorable que no ha dejado que desear en el desempeño de iguales funciones en la provincia de Pacasmayo.

Nombrado Juez de Primera Instancia de la provincia de Pataz el inteligente y pundoroso Dr. D. Ricardo Ortiz de Zevallos y Vidaurre, se vió obligado, por causa de enfermedad grave, á retirarse á la capital de la República con licencia del Supremo Gobierno, al poco tiempo de haber tomado posesión de su destino: natural es que muy breve se restituirá á ejercer sus funciones.

La Judicatura de 1.^a Instancia de la Provincia de Huamachuco, está servida por el Conjuez Dr. D. Oscar Blondet,

en razón de encontrarse sometido á juicio y suspenso el Juez titular. El Tribunal está satisfecho de la contracción y acierto con que ese jóven ilustrado administra justicia.

Las memorias presentadas cada año á esta Corte y al Ministerio de Fomento por el Juez Privativo de Aguas de esta Provincia Dr. D. Enrique de Guimaraes, dan idea del detenido estudio que, con el talento que le distingue, ha hecho de los Ríos — Chicama, Moche y Virú; de la distribución de las aguas que conducen; y de la imperiosa necesidad de reformar la novísima ley del ramo promulgada en 1902. Según esta corresponde á los Tribunales ordinarios—artículo 278—el conocimiento de los asuntos contenciosos; y en tal virtud esta Corte ha devuelto los expedientes elevados en alzada, que en su concepto tenían el carácter de administrativos. Alguna vez ha dispuesto el Ministerio de Fomento que estos actuados vuelvan al poder judicial; más hoy que en su mayor parte están establecidas las Comunidades de Regantes, nombrados sus Administradores, y constituidos los Sindicatos Regionales, son estas agrupaciones, por anómalo que se considere, puesto que las forman los mismos interesados en el aprovechamiento de las aguas, las que deciden los asuntos administrativos, y en revisión, el Ministerio de Fomento.

Terminado el periodo de cuatro años para que fué nombrado, según la ley de 10 de Agosto de 1898, Juez Privativo de Aguas del Departamento de Lambayeque, el Dr. D. José Rodolfo Osoreo, no ha sido posible elevar al Supremo Gobierno la terna respectiva para el nombramiento del nuevo Juez, por estar dividida la opinión del Tribunal sobre la verdadera inteligencia de los artículos 239 y 278 del Código de la materia; y por que las respectivas agrupaciones de que ya he hablado han hecho presente que creen innecesaria esa autoridad judicial. Son los jueces ordinarios de las provincias de Chiclayo y Lambayeque los que se encargan de sustanciar y resolver los asuntos contenciosos; y aún de convocar á los interesados para la formación de las Comunidades de Regantes y Sindicatos Regionales.

El Dr. D. Juan Gallagher y Canaval, nombrado Juez del crimen de las Provincias de Chiclayo y Lambayeque, solicitó, por telégrafo, en 7 de Febrero, que se comisionara al

Juez Dr. Pagador para que le recibiera juramento; y como no ha contestado hasta ahora el oficio que se le dirigió comunicándole el nombramiento, ni presentado el título debidamente registrado, díjele en respuesta, más ó menos, que no pudiendo reunir al Tribunal en acuerdo no era posible conferir la comisión pretendida.

La ley de 1.º de Enero de 1900 dictada en protección de la clase social menos favorecida de la fortuna, sustrayéndola de los abusos y exigencias de los que intervienen en los Juzgados de Paz, y procurándole rápida y eficaz justicia, viene produciendo efectos contrarios.

Siendo general el clamor sobre la falta de cumplimiento de dicha ley, se pidieron datos á los Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial; y de los obtenidos de esta Provincia, Chiclayo, Huamachuco y Santiago de Chuco; así como de las informaciones privadas, pero fidedignas, que he podido recoger, se descubre, que las Municipalidades tienen acordado hacer el servicio que les encomienda el artículo 2.º de aquella, solo con el producto de las papeletas que expidan, conforme al artículo 4.º; y como es insignificante ese producto, aún en esta capital, como se demuestra en el anexo número 5, con dificultad encuentran personal que acepte los cargos de amanuenses y alguaciles.

Ninguno de los seis Jueces de Paz de esta Ciudad administra justicia con amanuense y alguacil rentados por el Municipio, sino con los que se procuran los que se ven urgidos de interponer demanda.

Según el anexo ya citado número 5, en esta ciudad se han iniciado 246 juicios verbales, y solo se han expedido por la Municipalidad 114 papeletas: tan notable diferencia resulta probablemente de que alguno de los Jueces no ha exigido de los demandantes el cumplimiento del artículo 4.º; y positivamente de que los demandados se niegan á cumplir este precepto de la ley, prefiriendo las rebeldías y contumacia hasta perder las cuestiones.

Ante los seis Jueces de Chiclayo se han interpuesto, en el año, 146 demandas, de las que aún quedan muchas por sustanciar y resolver: nada dicen en sus informes esos funcionarios sobre amanuenses rentados; pero aseguran que

exigen la presentación de la respectiva papeleta, y que solo hay un alguacil para todos los juzgados.

En Huamachuco funcionan seis Jueces de Paz; se han iniciado 128 juicios; y el importe de las papeletas se ha distribuido en la proporción de S/ 12 al año para cada amanuense S/ 4 para cada alguacil y S/ 16 para gastos de escritorio, reservándose el Municipio la diferencia.

En Santiago de Chuco son cinco los Jueces: han conocido en 31 demandas, previa presentación de las respectivas papeletas; y el Juez de Primera Instancia informa, que, si bien á sus exigencias, la Municipalidad nombró amanuenses y alguaciles, no se ha conseguido que se abonen sus servicios, ni que se señale la renta que deben percibir.

Los anteriores datos dan á conocer, que, contra el propósito de la ley, los litigantes se sacrifican, para que se les sirva con regularidad, abonando con usura el importe arancelario de las actas y citaciones, además del que corresponde por la papeleta necesaria para demandar; y si tal sucede en las dos capitales de Departamento y en las importantes ciudades de Huamachuco y Santiago de Chuco, no puede dudarse que el desorden será mayor en las demás provincias y sus distritos. Indispensable es, pues, que exigiéndose los datos que aún faltan, se dicten medidas eficaces, para evitar que se oprima á la clase menesterosa, mientras se dá una nueva ley que satisfaga toda aspiración, empesando por reducir el número de los Jueces de Paz en proporción á los juicios que, por término medio, se ventilen en un año en cada localidad, y rentándolos convenientemente, para que pueda exigirseles consagración al servicio, y hacer efectivas las responsabilidades en que incurran.

Si el Tribunal cree aceptables las anteriores indicaciones, debe preparar la base, pidiendo los libros de todos los Juzgados de Paz del Distrito Judicial, para que formada la correspondiente estadística, se eleve con informe á la Excma. Corte Suprema, á fin de que, si lo juzga conveniente, gestione la reforma.

Esos libros que no se llevan en forma; que pasan ó nó de un año á otro de juzgado en juzgado, aunque sean hojas sueltas que se van agregando; que por lo mismo no ofrecen garantía y que no se archivan desde 1875 que lo ordené en cumplimiento de la ley, conviene, para evitar fraudes, que

sean rubricados con anotación del número de fojas, y suscritos al pie de la última acta, ántes de archivarlos, por los jueces de primera instancia, que en esta ciudad será el de revisiones, cuidando de que, con la debida anticipación, sean preparados los que han de servir en el año siguiente.

No habiendo sido posible, como sabeis, que el Superior Tribunal se reuniese en acuerdo durante las vacaciones, ni pudiendo permitir el que suscribe, que el archivo público mas importante de los establecidos en esta provincia permaneciera en funciones, sin embargo de estar gravemente enfermo el Notario responsable don Manuel Méndez, ordené que se cerrara y sellara por el Juez de vacaciones; y permanece en tal estado, hasta que se dé en administración bajo el respectivo inventario, disponiendo que al mismo tiempo se tase, para que pueda sacarse á remate, puesto que ha fallecido el indicado Méndez.

Ese archivo que guarda los más antiguos protocolos y expedientes desde el tiempo del coloniaje, se dió en administración en Noviembre de 1899, siendo de notar que el Juez de Primera Instancia comisionado para la entrega, no ha dado cuenta hasta ahora con el inventario que debió practicar.

Como lo he manifestado en otras ocasiones, no debe proveerse esa plaza de Escribano, por que la provincia está bien servida con los otros dos que en la actualidad funcionan; y "es conveniente consultar la comoda subsistencia de dichos funcionarios, á fin de evitar que su escasa renta los induzca á cometer faltas," como se expresa en el supremo decreto da 28 de Agosto de 1885.

Cinco Escribanos de Estado y dos de Diligencias turnan mensualmente en esta ciudad, para actuar en los juicios criminales; y sin embargo estos sufren notable demora, ya por que esos funcionarios se dedican preferentemente á la actuación de las civiles que producen derechos; ya por que los Jueces de Paz de los distritos, que no tienen la suficiente preparación, no organizan los sumarios con la debida regularidad y prontitud; ya por que los testigos son reacios para concurrir á dar sus declaraciones; ya por que los

misimos Jueces creen que es necesario absolver todas las citas que resulten en el sumario, aunque con las diligencias practicadas esté descubierta la existencia del crimen y la persona del delincuente.

Juzgo necesaria una recomendación para que en esta, como en las demás provincias, se proceda con más actividad, à fin de que no se prolongue la prisión de los enjuiciados tanto ó más tiempo del de la pena señalada al delito ó delitos objeto de los procesos, como sucede con alguna frecuencia.

Sufren tambien retardo algunos juicios criminales que, aunque iniciados por querella, se actúan por los trámites de oficio, con intervención del ministerio público; por que se retienen en la administración principal de correos, cuando no vienen franqueados, en virtud de lo que dispone el supremo decreto de 13 de Diciembre de 1892. Más como este solo puede referirse á los querellantes que hagan uso de los remedios de la apelación y del recurso de nulidad, y no á los acusados que están favorecidos por los artículos 421 del Código de Enjuiciamientos Civil, 256 y 257 del Reglamento de Tribunales, se ha trasmitido al Supremo Gobierno lo acordado al respecto por la Excma. Corte Suprema y por este Tribunal á fin de que se resuelva lo conveniente.

Con el importante propósito de mejorar nuestra legislación penal, el Supremo Gobierno ha encomendado, con verdadero acierto, al ilustrado señor Fiscal de la Excma. Corte Suprema Dr. D. José Salvador Caveró, la preparación de los proyectos de Códigos Penal y de Procedimientos en la misma materia, para que sean presentados á la próxima legislatura ordinaria; y ha dispuesto, que los Tribunales cooperen á la labor que va á emprenderse informando en el menor tiempo posible sobre los puntos mas salientes que deba comprender la reforma, y muy particularmente respecto de la conveniencia de implantar el juzgamiento por jurados.

Debo recordar, aunque carezca de significación, que, con asentimiento de mis antiguos colegas, me permití agregar á la memoria de 18 de Abril de 1876, un proyecto de procedimiento en materia penal, reuniendo en él lo más

apropiado, en mi concepto, de nuestra ley actual, y de un proyecto inserto en "La Gaceta Judicial," dando al juicio la misma forma que la del sumario en materia civil; por que las dos estaciones de sumario y plenario de nuestro actual sistema, dan lugar entre nosotros á que el criminal, que en el primer momento confiesa en su instructiva ser el autor del delito, no solo lo niega en la confesión, sino que avanza á asegurar, que aquella diligencia es contraria á lo que declaró. Con el tiempo viene la serenidad, se reflexiona y se presentan malos consejeros; y si de otro modo no ha podido probarse la delincuencia del encausado, queda sin castigo, y alentado para continuar en la carrera del crimen. Sucede tambien que en el sumario se trata de probar, aunque sea con falsas citas, la culpabilidad ó la inocencia del reo, haciendolo mas extenso que el plenario; y que en este muy rara vez se presenta prueba, por que basta lo actuado en el sumario para condenar ó absolver.

Aunque próximamente prestará el Tribunal la debida atención á la circular de 26 de Enero último del muy ilustrado señor Ministro de Justicia, me permito hacer algunas indicaciones, que pueden servir de tema á la discusión para emitir el informe pedido.

Desde luego, aventurando mi humilde opinión, en materia tan delicada, como la implantación del sistema de juicio por jurados, creo que no es llegada la época de una reforma de tanta trascendencia cuya bondad va á ensayarse; por que el país no está suficientemente preparado; por que la vida y la honra no deben someterse á ciudadanos que no han sido educados para la difícil profesión de administrar justicia, que requiere ciencia adquirida por el estudio, para comprender la ley y su espíritu, para aplicarla con acierto y ocurrir á los principios generales cuando sea necesario, y que exige á la vez la práctica, que dan los años de constante consagración á la escabrosa carrera de distribuir la justicia, á fin de saber apreciar la índole y circunstancias de la multiplicidad de casos que se presentan; por que con la responsabilidad á que están sujetos los Jueces permanentes está garantida la libertad individual, amenazada, tal vez, por los jurados, que saliendo de todas las clases socia-

les, y siendo irresponsables, pueden pronunciar veredictos injustos, por odiosas pasiones, por benignidad de carácter, por la compasión que despierta el desgraciado, ó por ignorancia; por que la administración de justicia no se mejora implantando repentinamente un nuevo sistema, sino reformando las leyes que son causa de que los juicios no se sustancien y resuelvan con la prontitud que todos deseamos, ó que exigen pruebas, sino imposibles, difíciles de presentarse; y por último, por que estando comunmente el hecho unido al derecho, según las circunstancias que rodean al delito cometido, no es lógico que su apreciación se encomiende al sentido común, y que se deje á la ciencia la aplicación de la pena escrita.

Pretendiendose por algunos jurisconsultos que no deben sustanciarse sumarios de oficio, sino á instancia de parte, cuando se trata de lesiones que solo producen enfermedad ó incapacidad para trabajar de cuatro á veinte dias, bajo el falso supuesto de que tales lesiones, revistiendo carácter leve, estan comprendidas en el artículo 18 del E. P.— me ocupé del asunto en la memoria de 18 de Marzo de 1891, en el sentido de que, no estableciendo el Código Penal la distinción de delitos graves y leves, sinó la de delitos y faltas, castigando los primeros con penas graves y las segundas con penas leves, é imponiendo la segunda parte del artículo 251, para el caso propuesto, la pena de arresto mayor considerada entre las graves, no es dudoso que aquel hecho punible constituye un delito y no una falta; y que debe pesquizarse de oficio.

La excepción del artículo 18 del C. de E. P. se refiere expresamente á los maltratamientos ó lesiones leves, á que dá el nombre de faltas el artículo 394 del Código Penal.

De grande importancia considero que, en el proyecto de Código Penal que ha de presentarse á la próxima legislatura ordinaria, se trate lo más extensamente posible, con precisión y claridad de los delitos contra la honestidad y el honor; por que la divergencia de opiniones respecto del verdadero sentido del artículo 278 del Código que hoy rije, ocasiona algún retardo en la resolución de las causas que por tales delitos se promueven.

Ese artículo literalmente dice: "No se procederá á formar causa por los delitos á que se refiere este título"—el segundo de la sección octava del libro segundo del Código—"sino por acusación ó instancia de la interesada, ó de la persona bajo cuyo poder se hubiere hallado cuando se cometió el delito". Y aunque no presumo que mi opinión sea acertada, me permito repetir lo que al respecto consigné en la memoria de 18 de Marzo de 1895.

"La ley establece esa prohibición en homenaje al decoro de las familias, al secreto que quieran guardar y á la paz del hogar doméstico; por que, como agregan los tratadistas, solo la agraviada puede saber si le conviene ó no acusar; y por que en muchos casos la acusación traería el escándalo y una publicidad que causaría mayores daños que el delito mismo."

"Concordante con el anterior artículo, el 18 del C. de E. P. exceptúa de la intervención fiscal aquellos delitos, salvo los casos en que la ley se la conceda expresamente; y de estos casos no se conocen otros en nuestra legislación que los incidentes de jurisdicción, y el estatuido en la segunda parte del artículo 278 que dice":

"Si el delito se cometiera contra una impuber que no tenga padres ni guardador, puede acusar cualquiera del pueblo y procederse de oficio."

"Contra tan terminantes disposiciones se sostiene, que desapareciendo la razon de la ley luego que acusa la agraviada ó quienes por ella tienen derecho de hacerlo, puesto que así se hace público el delito y causa alarma en la sociedad, debe intervenir el ministerio fiscal, y aún procederse por las trámites de oficio."

"Tal argumento, que puede dar motivo para reformar la ley, más no para proceder contra lo dispuesto en ella, resulta de la interpretación que se dá á las palabras *acusación* ó *instancia* que emplea el artículo 278 citado, y de la confusión que se hace de las voces técnicas *acusación*, *querrela* y *denuncia*."

"Veamos lo que dice la ley y enseñan los tratadistas." Instancia es—artículo 278 del C. de E. C.—la prosecución del juicio, desde que se interpone la demanda, hasta que el Juez la decida. De esta definición clara se deduce,

que el que acusa promueve una instancia; y por lo mismo, si no se dá á las palabras *acusación* ó *instancia* una significación distinta de las que les corresponde, hay que convenir que la una es correlativa de la otra: esto es, la demanda en lo civil—la acusación en lo criminal—promueven instancia: no hay instancia, si no existe demanda ó acusación."

"La instancia empieza, pues, en materia criminal, tratándose de delitos exceptuados, por querella, acusando ante el Juez al individuo que cometió el delito, y pidiendo se le aplique la pena señalada por la ley: si no hay querella, repito, no puede haber instancia, no puede abrirse juicio por esos delitos.

"Más, se toma *instancia* por querella, y acusación por denuncia; y se dice—si hay querella se promueve instancia, no tiene intervención el ministerio público, y debe seguirse el juicio por los trámites peculiares: si hay simple acusación, no hay interés en la agraviada de ocultar la deshonor, y desapareciendo así la razón de la ley, debe intervenir el acusador público, é instruirse el sumario por los trámites de oficio."

"Los que así piensan, no se han fijado en que en uno y otro caso, por instancia ó por acusación, en el sentido que toman estas palabras, el delito se hace público, y de consiguiente, la misma razón habría para proceder en el primer caso, como se pretende en el segundo."

"Ya he hecho notar que la querella promueve la instancia, que son correlativas; y que la querella es la acusación: veamos ahora la diferencia entre acusación y denuncia."

"Acusación, hablando con propiedad, es el cargo ó conjunto de cargos que se hacen contra una ó más personas determinadas, pidiendo que se les aplique la pena que la ley señala. En los juicios por delitos que afectan á la sociedad en general, la acusación es una de las partes esenciales del plenario, y tiene por objeto demostrar el grado de culpabilidad del acusado y la pena que le corresponde sufrir, puesto que ya en el sumario está descubierta la existencia del delito y la persona del delincuente."

"En los juicios por los delitos exceptuados la querella

es la acusación; por que en ellos, á tenor del artículo 131 del C. de E. P., formalizado el juramento de calumnia por el querellante ó acusador, y recibida la instructiva del acusado, se remite á prueba la causa, y se pronuncia sentencia."

"Denuncia en derecho, es la manifestación que se hace por cualquiera contra otra persona por algún delito que ha cometido, no con el objeto de seguir el denunciador el juicio en su nombre, ni tomar satisfacción para sí mismo, sino con el fin de informar al Juez para que castigue al delincuente."

"Se diferencia la denuncia de la acusación en que en esta el acusador ó querellante es parte en el juicio y el denunciante no lo es; y en que el acusador debe probar el hecho, con imposición de pena, si no lo hiciere, y el denunciante no está obligado á ofrecer prueba, y solo es castigado si la denuncia resultase maliciosa."

Hay algo más importante de que debe ocuparse el proyecto de C. P.—la pena de muerte consignada en nuestro Código actual en los artículos 231 y 232.

Si las penas, como he dicho en otra ocasión, solo tuviesen por objeto castigar al delincuente, y se establecieran como venganza, nada habría que decir de la capital, prescindiendo de que la sociedad tenga ó no derecho de imponerla. Pero como las penas se han establecido con el fin de que se repare el daño causado, de procurar la enmienda del culpable y el escarmiento de los demás hombres, resulta que la de muerte es inútil é innecesaria, dura y desproporcionada; por que con ella, que es la angustia de un momento, que es un mal grave, pero transitorio, desaparece el individuo, que pudo ser susceptible de enmienda; por que con la ejecución del asesino, no se vuelve á la vida á la víctima; y por que el suplicio de un criminal es solo un espectáculo que mueve á compasión, y acusa á la ley, sin servir de ejemplo ó escarmiento, desde que la escena pasa rápidamente y se olvida.

Dije en la memoria de 1893 y hoy lo repito por ser de oportunidad, que la prisión perpetua—las obras públicas—los trabajos forzados—la prisión temporal, calculando que la edad debilite las pasiones, que la disciplina moralice, que el

trabajo proporcione un pequeño capital, para que el delincuente se restituya á la sociedad como miembro útil, son otros tantos ejemplos vivos de espriación, capaces de llevar al ánimo peor dispuesto el propósito de apartarse de la senda de perversión.

Las cárceles del Distrito Judicial, no tienen sino el nombre de tales, como se ha manifestado tantas veces. Confundidos en perímetros estrechos, insalubres é inseguros, los detenidos, los reos y aquellos contra quienes se ha expedido sentencia condenatoria, cualquiera que sea la gravedad de los delitos por los que se juzga á los unos y se ha impuesto pena á los otros, son más bien focos de corrupción donde se acostumbran á vivir en la ociosidad pensando siempre en la evasión.

La de esta ciudad, que encierra setenta y uno como se demuestra en el cuadro número 6, y que es susceptible de ensanche, pudo recibir importantes mejoras á iniciativa del inteligente y laborioso señor Prefecto del Departamento don Lino Velarde, que tiene dadas pruebas de su actividad, de su espíritu práctico, y del deseo de mejorar los edificios públicos, y las condiciones higiénicas de estos y de las poblaciones confiadas á su administración; mas se tropezó, como siempre, con la insuficiencia de las rentas municipales.

El jardín establecido en el patio del local en que funciona la Corte y los Juzgados de 1.^a Instancia debe desaparecer, por que regado con agua inmundada que se consume allí mismo, sin que sea posible dar salida al residuo, es perjudicial á la salud y una amenaza para el edificio. Consecuencia de ello fué el desplome de dos paredes inmediatas á uno de los salones principales, cuya reparación emprendí por creerlo indispensable el Tribunal, sin embargo de no haber encontrado fondos de justicia. Aun se adeuda algo del importe de esa obra y de otras de inaplazable ejecución, como tendreis ocasión de informaros por las cuentas de los dos últimos años, que he ordenado se presenten para su exámen, como lo dispone la ley. A este respecto haré algunas indicaciones en el próximo acuerdo para que dispongais lo conveniente.

Creo haber hecho, ilustres colegas, cuanto me ha permitido mi escasa inteligencia, para sostener el prestigio y respetos del Tribunal, que es mi única aspiración. Hago votos por que sea más fácil y proficua vuestra labor en el año judicial de 1904, cuyo despacho declaro abierto, por no haber concurrido al acto el señor Vocal Dr. D. Juan Luna designado para sucederme en la presidencia.

Trujillo, Marzo 18 de 1904.

PEDRO MARTÍNEZ DE PINÍLLOS.



Anexo Número 1.

CORT

BAYEQUE.

CUADRO EST

Judicial de 1903.

		Resúmen		Recursos de nulidad	
		Resueltas	Pendientes	Admitidos	Denegados
Trujillo	24	160	64	17	21
Pacasmayo	17	13	4	...	...
Chiclayo	64	135	29	9	8
Lambayeque	55	129	26	3	4
Otuzco	75	63	12	1	...
Santiago de	13	6	7	...	...
Huamachuco	46	39	7	...	...
Pataz	20	17	3	...	...
Piura	11	8	3	...	1
Cajamarca	1	...	1	...	...
TOTAL	26	570	156	30	34

Mestas,
accidental.

Anexo Número 3.

CUADRO DEMOSTRATIVO

EN CUANTO Á LA NATURALEZA DE LOS JUICIOS CIVILES.

SU NATURALEZA	Para resolver	Resueltas	Pendientes
Preparatorias.....	65	53	12
Ordinarias.....	228	174	54
Extraordinarias.....	47	43	4
Sumarias.....	264	196	68
Ejecutivas... ..	106	90	16
Coactivas.....	16	14	2
Totales.....	726	570	156

Trujillo, Marzo 18 de 1904.

V.º B.º

Pinillos

Jesús A. Mestas.
Secretario accidental.

Anexo Número 4.

CUADRO DEMOSTRATIVO EN CUANTO A LA NATURALEZA DE LOS JUICIOS CRIMINALES.

DELITOS	Para Resolver	Resueltas	Pendientes
Allanamiento de domicilio.....	7	6	1
Asonada.....	3	2	1
Abigeato.....	25	24	1
Abuso de autoridad.....	9	6	3
Calumnia.....	10	8	2
Confabulación.....	1	0	1
Conato de homicidio...	12	13	0
Desacato.....	9	8	1
Despojo violento.....	1	0	1
Delito de imprenta.....	3	2	1
Defraudación.....	3	3	0
Falsificación y estafa...	7	6	1
Falsedad.....	1	1	0
Fuga de presos.....	3	3	0
Homicidio.....	75	65	10
Homicidio frustrado.....	17	15	2
Heridas y lesiones.....	78	70	8
Habeas Corpus.....	2	2	0
Incendio.....	4	3	1
Injurias.....	12	10	2
Parricidio.....	1	1	0
Perjurio.....	2	2	0
Prevaricato.....	1	1	0
Pérdida de expedientes.....	4	4	0
Robo y hurto.....	44	41	3
Suplantación.....	2	1	1
Secuestración.....	4	4	0
Suicidio.....	1	1	0
Violación de domicilio.....	3	1	2
Violación de correspondencia...	1	1	0
Rapto y estupro.....	20	19	1
Totales.....	365	322	43

Trujillo, Marzo 18 de 1904.

V.° B.°
PINÍLLOS.

Jesús A Mestas,
Secretario accidental.

Anexo Número 5.

RAZÓN de los juicios verbales iniciados en la provincia de Trujillo, durante el año judicial de 1903, conforme a los datos suministrados al Juzgado de Revisiones, por los Jueces de Paz, el H. Concejo Provincial y los Concejos Distritales, en virtud de orden superior.

DISTRITOS	N.º de juicios verbales	N.º de papeletas que corresponde	Promedio mensual	N.º de papeletas expedidas por los Concejos	Promedio mensual
Trujillo.....	246	492	S/41	114	S/9 50
Ascope.....	83	166	13 83	97	8 08
Chocope.....	36	72	6	56	4 66
Chicama.....				31	2 58
Huanchaco.....	4	8	66	7	58
Laredo.....				10	83
Moche.....				37	3 08
Magdalena de Cao....	21	42	3 50		
Paiján.....	98	196	16 33	103	8 58
Simbal.....				10	83
Santiago de Cao.....	4	8	66		
Salaverry.....	55	110	9 16	63	5 25
Virú.....	12	24	2	41	3 41
	559	1118		569	

Trujillo, Febrero 22 de 1904.

E. de Guimaraes.

Anexo Número 6.

CUADRO ESTADÍSTICO del movimiento de presos, habido en la Cárcel Pública de esta capital, durante el año judicial de 1903.

	Detenidos		Rematados		Totales
	H	M.	H	M.	
Existencia del año 1902.....	30	6	16	1	53
Ingresados en 1903.....	122	15	4	1	142
Entradas.....	152	21	20	2	195
Han cumplido su condena.....			8	1	9
Remitidos al Panóptico.....	2				2
Trasladados á otra cárcel.....	8				8
Puestos en libertad.....	67	17			84
Fallecidos.....	1		1		2
Fugados.....	17		2		19
Salidas.....	95	17	11	1	124
Continúan en el establecimiento.....	57	4	9	1	71
Sumas para igualar.....	152	21	20	2	195

Trujillo, Marzo 18 de 1904.

V.° B.°
Pintillos.

Jesús A. Mestas
Secretario Accidental,

